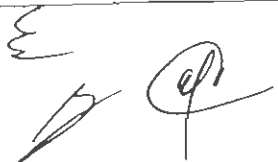
 Defensoría del Consumidor	TRIBUNAL SANCIONADOR	Fecha: 28/05/2019 Hora: 08:53 Lugar: Ciudad y departamento de San Salvador.	Referencia: 1436-13
RESOLUCIÓN FINAL			
I. INTERVINIENTES			
Consumidor denunciante:			
Proveedora denunciada:			
II. HECHOS DENUNCIADOS			
<p>Expuso en su denuncia que en febrero/2010 compró de contado una motocicleta marca modelo turismo año 2009, color negro y rojo, y que la proveedora se comprometió a realizar las gestiones pertinentes para las placas de la misma, sin embargo, a la fecha de interposición de la denuncia, no se le habían entregado dichas placas. Expuso que en reiteradas ocasiones tuvo que ir a oficinas de la proveedora a que le extendieran una carta donde se hiciera constar que la motocicleta fue vendida a su persona. Lo anterior, para no tener problemas con la policía por no estar la moto a su nombre pues únicamente poseía una constancia de pago de impuesto de importación, extendida por el Ministerio de Hacienda.</p>			
III. PRETENSIÓN PARTICULAR			
<p>Solicitó expresamente en su denuncia, que la proveedora le hiciera entrega de las placas de la motocicleta, o en su defecto, devolviera el total del monto pagado por la motocicleta, que equivale a \$940.00.</p>			
IV. INFRACCIÓN ATRIBUIDA			
<p>A la proveedora denunciada se le atribuye la posible comisión de la infracción grave regulada en el artículo 43 letra e) de la Ley de Protección al Consumidor –en adelante LPC–, por no entregar los bienes en los términos contratados.</p>			
V. CONTESTACIÓN DE LA PROVEEDORA DENUNCIADA			
<p>Se siguió el procedimiento consignado en los artículos 143 y siguientes de la LPC, respetando la garantía de audiencia y el derecho de defensa de la proveedora, quien se pronunció por medio de escrito presentado por el Administrador Único Propietario y representante legal, en el que confirmó los hechos denunciados por el consumidor, respecto de la compra de la motocicleta en febrero/2010 y aseguró que se encontraba en la disposición de tomar la motocicleta y hacer una devolución teniendo en cuenta la depreciación del bien por el transcurso del tiempo.</p>			
VI. ELEMENTOS DE LA INFRACCIÓN ATRIBUIDA			
<p>El artículo 43 letra e) de la LPC, literalmente, prescribe que constituye una infracción grave: “no entregar los bienes (...) en los términos contratados”.</p> <p>Por lo anterior, este Tribunal deberá analizar la concurrencia de los siguientes elementos: en</p>			



primer lugar, las condiciones en que se ofreció el bien, en cuanto a calidad y tiempo de cumplimiento, según corresponda; y en segundo lugar, la existencia del incumplimiento por parte de la proveedora al no entregar el bien en los términos contratados por el consumidor; lo que, en caso de configurarse, daría lugar a la sanción prescrita en el artículo 46 del referido cuerpo de ley.

VII. VALORACIÓN DE PRUEBA/HECHOS PROBADOS-

Este Tribunal valorará la prueba de conformidad a los métodos aceptados en el ordenamiento jurídico, para posteriormente determinar si en el presente procedimiento, se ha configurado la infracción consignada en el artículo 43 letra e) de la LPC, por no prestar los servicios en los términos contratados al denunciante.

A. Al respecto, el artículo 146 de la LPC establece que en los procedimientos ventilados ante este Tribunal, serán admitidos los medios de prueba reconocidos en el derecho común -en lo que fuere aplicable con la naturaleza de éste- y los medios científicos idóneos. Asimismo, en el inciso final del referido artículo se dispone que las pruebas aportadas serán valoradas según las reglas de la sana crítica, que están basadas en la lógica interpretativa, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos idóneos.

El artículo 313 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria en el presente procedimiento conforme lo dispuesto en el artículo 167 de la LPC, señala que la prueba tendrá por objeto las afirmaciones expresadas por las partes sobre los hechos controvertidos; prueba que, además, debe haber sido obtenida de forma lícita, debe estar relacionada con el objeto de la misma y ser idónea según las reglas y criterios razonables. En otras palabras, para que una prueba sea valorada debe ser oportuna, pertinente y conducente.

B. En el presente caso, es menester señalar que el expediente fue certificado a este Tribunal de conformidad a la presunción legal establecida en el artículo 112 inciso segundo de la LPC, por lo que en aplicación de dicha disposición se presumirá legalmente como cierto lo manifestado en la denuncia.

De conformidad con el artículo 414 del Código Procesal Civil y Mercantil —de aplicación supletoria al presente procedimiento administrativo sancionador según el artículo 167 de la LPC—, las presunciones legales, conocidas como presunciones *iuris tantum*, son aquellas en razón de las cuales *la persona a la que favorezca quedará dispensada de la prueba del hecho presunto al estar probados los hechos en que se base*.

Sin embargo, las mismas admiten prueba en contrario, y en ese caso *la actividad probatoria se podrá dirigir tanto a demostrar que los indicios probados inducen a un hecho distinto o a ninguno, como a efectuar la contraprueba de dichos indicios para establecer su inexistencia*.

Jurídicamente, la presunción se define como aquel razonamiento en virtud del cual, partiendo de un hecho que está probado o admitido, se llega a la consecuencia de la existencia de otro hecho

que es el supuesto fáctico de una norma, atendiendo al nexo lógico existente entre los dos hechos. Las presunciones son un método lógico para probar y están compuestas estructuralmente de una afirmación, hecho base o indicio, de una afirmación o hecho presumido y de un enlace. La afirmación base o el hecho base —también conocido como indicio— recibe esta denominación porque es el punto de apoyo de toda presunción. La base de la presunción puede estar constituida por uno o varios indicios; pero lo decisivo del indicio es que esté fijado en el procedimiento y que resulte probado. En conclusión, la afirmación presumida o el hecho presumido es una consecuencia que se deduce del hecho base o indicio.

C. En el presente procedimiento sancionatorio, se incorporó prueba documental por el denunciante, de la cual será valorada por este Tribunal únicamente la pertinente, que consiste en:

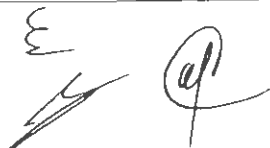
- a) Fotocopia confrontada de factura número 0441 emitida por _____ a nombre del denunciante por un monto de \$940.00 en concepto de pago de contado por una motocicleta de las características detalladas en el mismo documento (folio 3).
- b) Fotocopia confrontada de documento emitido por la proveedora y dirigido a la Policía Nacional Civil, con fecha 22/04/2013, en el que se hace constar la compra de la motocicleta de las mismas características detalladas en factura y que a esa fecha se encontraba en proceso el trámite de placas y tarjeta de circulación de dicho bien (folio 4).

Con la prueba antes relacionada y lo manifestado por la proveedora mediante escrito presentado a este Tribunal (folio 25), se establece que efectivamente el denunciante adquirió de la proveedora denunciada una motocicleta en febrero/2010 por un valor de \$940.00 (folio 3); y que las placas respectivas no fueron entregadas en la fecha de compra, sino que se emitió un documento amparando la compra y haciendo constar que se encontraba en trámite la obtención de las respectivas placas (folio 4).

VIII. ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, sobre la base de los hechos probados con las documentación presentada, se establece que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 999, 1013, 1016 y 1020 del Código de Comercio, en relación con los artículos 1309, 1417, 1419, 1627 y 1629 del Código Civil, la factura agregada a folio 3 prueba la obligación del vendedor de entregar inmediatamente al consumidor la motocicleta ahí descrita junto con los documentos necesarios para el uso y goce de la misma; y salvo que hubieren pactado algo distinto, la motocicleta debía ser entregada al consumidor en el establecimiento de la proveedora.

Además, por tratarse de una compraventa de vehículo automotor, el contrato es de naturaleza real, sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, entre ellas al otorgamiento de una escritura pública o documento legalizado donde constara la transferencia de dominio objeto de la compraventa (artículo 17 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial), con el fin

E


de que dicho título de dominio pudiera ser inscrito en el Registro Público de Vehículos Automotores; pues, de conformidad con lo establecido en los artículos 4, 14, 18 y 26 del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, *toda clase de vehículo automotor para poder circular permanentemente en las vías públicas, deberá ser previamente matriculado*; y es obligación de los propietarios obtener la autorización respectiva y acreditarla con las placas y tarjeta de circulación correspondientes que extiende la autoridad competente.

En ese sentido, en el caso de la compraventa de vehículos automotores, como el relacionado al objeto de reclamo, para asegurar el adecuado uso y goce del bien—cuando el pago del precio ha sido efectivo en el momento de la contratación—, la proveedora debe entregar en ese mismo momento al consumidor las placas respectivas y la tarjeta de circulación vigente (o en su caso los documentos que le permitan obtener efectivamente la autorización de circulación necesaria si así es convenido), para que se entienda que ha cumplido con sus obligaciones contractuales en debida forma; porque conforme a lo dispuesto en el artículo 1417 del Código Civil *los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella*.

En el presente caso, el consumidor afirmó que la proveedora nunca le entregó las placas—y por consiguiente la tarjeta de circulación— de la motocicleta, aún pasados más de 3 años después de la compra de la misma, y dicha omisión fue confirmada por la proveedora denunciada. Por tal circunstancia —de conformidad con lo dispuesto en el art. 1422 del Código Civil— la proveedora se encontraba en mora de aproximadamente 39 meses en su obligación de entregar los referidos documentos al denunciante al momento en que éste interpuso su denuncia en el Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor, no obstante que era obligatorio para la proveedora entregarlos conjuntamente con la motocicleta por la naturaleza del bien que estaba vendiendo.

El incumplimiento de la proveedora ha permanecido en el transcurso del tiempo, pues dicha omisión se ha perpetuado hasta el día de la interposición de la denuncia y no consta en el presente expediente prueba que acredite fehacientemente la entrega al consumidor de las placas y tarjeta de circulación de la motocicleta que adquirió de la proveedora.

Los hechos anteriores, no fueron desvirtuados por la proveedora denunciada sino por el contrario, fueron confirmados por la misma mediante escrito agregado a folio 25, en el que se admite la celebración de una compraventa entre la proveedora y el denunciante y propone llegar a un acuerdo con este último con la posibilidad de aceptar la motocicleta de regreso y no acredita la efectiva entrega al denunciante de las placas y tarjeta de circulación de la motocicleta, manteniéndose la presunción legal del artículo 112 inciso 2° de la LPC. En razón de la prueba

valorada, la presunción legal y las disposiciones legales aplicables al contrato de compraventa de vehículos automotores, la conducta de no entregar la motocicleta junto con sus placas y tarjeta de circulación vigente en el momento de la compraventa, la cual ya había sido pagada por el consumidor, y no haber entregado dichos documentos aún después de un período aproximado de 39 meses (al menos hasta la fecha de interposición de la denuncia), sin ninguna justificación comprobada en el presente procedimiento por parte de la sociedad, constituye la infracción tipificada en el artículo 43 letra e) de la LPC.

El artículo 40 de la LPC establece que las infracciones a lo dispuesto en dicha ley y demás disposiciones aplicables en materia de consumo, imputables a los proveedores que en la venta de un bien o la prestación de un servicio, actúen con dolo o culpa y causen un menoscabo al consumidor, serán sancionadas administrativamente.

Desde este análisis, se concluye que la proveedora, actuó con *dolo* en la entrega de los documentos necesarios para asegurar el goce del bien vendido bajo las regulaciones legales establecidas (placas y tarjeta de circulación de la motocicleta vendida al consumidor); pues la sociedad al dedicarse a la venta de ese tipo de bienes, debe contar con la posibilidad legal de poder hacer la tradición y transferencia de dominio a los respectivos compradores al momento de la compraventa en las condiciones exigidas y que dicha tradición sea efectiva frente a terceros. Sin embargo, en el presente caso no se ha podido establecer que la proveedora, haya contado con dicha posibilidad legal al momento en que el consumidor compró la motocicleta objeto del presente reclamo, por el contrario se ha establecido que la proveedora después de aproximadamente más de 3 años, no había entregado los documentos debidos (al menos hasta la fecha de interposición de la denuncia) e incluso emitió una carta dirigida a la Policía Nacional Civil asegurando que los documentos se encontraban en trámite después de más de 3 años de la compraventa, lo cual no coincide con las condiciones legales de un contrato de esa naturaleza, por lo que se considera que la proveedora actuó con *dolo*. En consecuencia, se ha comprobado la comisión de la infracción atribuida a la proveedora denunciada, contemplada en el artículo 43 letra e) de la LPC, al no haber entregado al consumidor la motocicleta con sus documentos legales como era debido, conforme a la naturaleza del contrato y a lo regulado legalmente.

IX. PARÁMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

Habiéndose comprobado fehacientemente que la proveedora cometió la infracción grave regulada en el artículo 43 letra e) de la LPC, es procedente la imposición de la sanción prevista en el art. 46 de la LPC, según los parámetros establecidos en la ley en mención.

Para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LPC, debe considerarse que la proveedora denunciada se dedica a la comercialización de motocicletas; y que por la actividad que realiza debe atender a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la LPC, de forma concreta,

E
[Firma]

de entregar la motocicleta objeto del reclamo en los términos contratados, respetando las exigencias legales.

En el presente caso, al comprobarse que la proveedora actuando con dolo incurrió en la infracción grave antes descrita al no entregar oportunamente los documentos legales requeridos de la motocicleta que el consumidor pagó en su totalidad, le ocasionó un menoscabo económico directo al consumidor, pues erogó una cantidad de dinero de \$940.00 a cambio de un bien cuyo goce no podía hacer efectivo de inmediato conforme a las reglas aplicables ante la falta de los documentos que era obligatorio para la proveedora entregar junto con la motocicleta para acreditar la propiedad de dicho bien y que pasados más 3 de años desde la compra, aún no le eran entregados.

X. REPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN ALTERADA

En virtud de que se ha determinado que la proveedora no cumplió con la obligación de entregar las placas y tarjeta de circulación de la motocicleta que el consumidor adquirió conforme a los términos contratados; y que la pretensión del consumidor detallada en su denuncia es que se le entreguen dichos documentos, de conformidad con el artículo 83 letra c) de la LPC, este Tribunal debe dictar la medida de reposición de la situación alterada, ordenando a la proveedora, que en el plazo legal cumpla con su obligación de entregar la documentación antes referida, o en su defecto realice el reintegro de \$940.00 al señor _____, cantidad que fue pagada por el consumidor en concepto de una motocicleta cuyos documentos de propiedad no le fueron entregados, sin perjuicio de que el consumidor realice en ese caso la devolución de la motocicleta, y pueda ejercer su derecho a reclamar indemnización, establecido en el artículo 13 inciso 3° de la LPC.

XI. DECISIÓN

Por todo lo expuesto, y sobre la base del artículo 101 inciso segundo de la Constitución de la República; artículos 43 letra e), 46, 49, 83 letras b) y c), 146, 147 y 149 de la Ley de Protección al Consumidor; y, artículo 218 del Código Procesal Civil y Mercantil, este Tribunal resuelve:

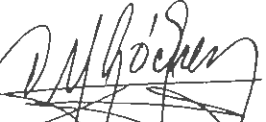
- a) Sancionara _____, con la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,315.80)** *equivalentes a seis salarios mínimos mensuales urbanos en la industria* (según Decreto Ejecutivo N° 56 del 06 de mayo de 2011, D.O. No.85, Tomo 391 de la misma fecha), por la comisión de la infracción regulada en el artículo 43 letra e) de la LPC, por no entregar los bienes en los términos contratados, respecto de los hechos denunciados por el señor _____.
- b) Ordenar a _____, entregue al señor _____ las placas y tarjeta de circulación de la motocicleta que el consumidor adquirió; o en su defecto reintegre


c) La presente resolución deberá ser cumplida dentro de los **diez días hábiles siguientes** a la notificación respectiva, debiendo comprobar su acatamiento a este Tribunal dentro del plazo indicado. La multa impuesta deberá hacerse efectiva en la **Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda**, dentro del referido plazo; caso contrario, la Secretaría de este Tribunal certificará la presente resolución para ser remitida a la Fiscalía General de la República para su ejecución forzosa conforme a los procedimientos comunes.


INFORMACIÓN SOBRE RECURSO


Recurso procedente:	Plazo para interponerlo: diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución.	
Reconsideración		
Lugar de presentación:	Oficinas del Tribunal Sancionador, 7ª Calle Poniente y Pasaje "D" #5143, Colonia Escalón, San Salvador.	
Autoridad competente:	Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor	

PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR
DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR.


Claudia Marina Gómez Casillo
Presidente


Mario Antonio Escobar Castaneda
Primer Vocal


Oscar Gilberto Canjura Zelaya
Segundo Vocal


Secretario Tribunal Sancionador

Q

